

La irrupción de Ollanta Humala en la escena electoral peruana

Bruno Revesz*

* *Investigador
del Centro
de Investigación
y Promoción del
Campesinado (CIPCA),
Piura, Perú.*

La primera vuelta de las elecciones presidenciales y congresales peruanas, el 9 abril de 2006, ubicó de manera singular al país en relación al actual giro político del subcontinente puesto de manifiesto ya desde las elecciones de Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, y luego confirmado por las de Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia y Michelle Bachelet en Chile.

Por un lado, a diferencia de los precedentes procesos electorales, la campaña para elegir al sucesor del presidente Alejandro Toledo ha generado un consenso relativamente amplio respecto de que se necesita un conjunto de reformas profundas para lograr que los beneficios del progreso económico sean compartidos por toda la población y no (como hasta ahora) por unos cuantos, y de que seguir esperando a que el crecimiento económico "se derrame" simplemente constituiría una receta para el desborde social. Pero, tal como hemos de precisar aquí, la gran perdedora de estas elecciones es la candidata de la

derecha (UN), a pesar de disponer de una hegemonía aplastante en los medios de comunicación y del apoyo de las elites en el poder y de los grupos dominantes, y de haber sido colocada largo tiempo en *pole position* por las empresas que difunden sondeos de opinión. En la vereda de enfrente, y contrastando con el reconocimiento efusivo que le brindaron desde afuera tanto Chávez como Morales, ningún movimiento social, fuerza gremial u organización de izquierda inscrito en el registro electoral respaldó a Ollanta Humala, el hombre que con más determinación afirmó la necesidad de abrir caminos para dejar atrás el ya exhausto Consenso de Washington, y el candidato que obtuvo la mayor votación en esta primera vuelta.

Instituciones y fragmentación política

Expresión y efecto del éxito fujimorista (1990-2000), la crisis del sistema de partidos en el Perú tuvo como correlato la proliferación de movimientos independientes y la creación de partidos *ad hoc*, que no tenían arraigo en la sociedad y se definían más por personalidades que por una ideología. Para muchos, el acceso al Congreso no implicaba ni presuponía experiencia de gestión colectiva o los costos del aprendizaje profesional de la política en los rangos de una organización, ni tampoco la confrontación y el debate con otros proyectos de sociedad. Son numerosas las protestas populares reseñadas en los últimos años por el Observatorio Social de América Latina (OSAL), y es significativo que ninguno de estos conflictos (mineros, cocaleros y otros), ni siquiera las revueltas arequipeñas de 2002, haya sido canalizado o resuelto a través de mediaciones o de organizaciones partidarias.

A fin de remediar en algo esta mediocridad y déficit de representación, el Congreso elegido en 2001 adoptó en octubre de 2003, por primera vez en la historia del país, una ley que regulaba las actividades de los partidos políticos. Uno de sus dispositivos establecía barreras de entrada (acreditación de comités locales en por lo menos 65

“Son numerosas las protestas populares reseñadas en los últimos años por el OSAL, y es significativo que ninguno de estos conflictos (mineros, cocaleros y otros), ni siquiera las revueltas arequipeñas de 2002, haya sido canalizado o resuelto a través de mediaciones o de organizaciones partidarias”

de las 194 provincias, y presentación de 125 mil firmas para obtener el reconocimiento de las autoridades electorales), con la finalidad de disminuir la fragmentación política y el número de los partidos y así incentivar el desarrollo de los partidos más sólidos. Más tarde se estableció una valla electoral que permite el acceso al Congreso a las organizaciones que obtengan por lo menos el 4% de los votos válidos, o alternativamente a un mínimo de 5 representantes elegidos.

A pesar de estas restricciones y de otras exigencias (elecciones internas, presentación de su contabilidad, etc.), son 24 las organizaciones políticas (tanto partidos como alianzas y frentes) que entraron a competir al presentar listas de candidatos al congreso, de las cuales 20 presentaron un candidato a la elección presidencial. No fue el caso de Perú Posible, el partido de Alejandro Toledo, que no encontró candidato idóneo. Humala, por su parte, tuvo que capear una situación particular; al no haber podido su Partido Nacionalista cumplir a tiempo con los requisitos mencionados, negoció y obtuvo la franquicia electoral de Unión Por el Perú (UPP), el partido fundado por Javier Pérez de Cuéllar, ex Secretario General de las Naciones Unidas, cuando se presentó contra Fujimori en las elecciones de 1995.

De la dispersión hacia la polarización

Sin embargo, tal como día a día lo mostraron las encuestas de opinión, y atreviéndonos a utilizar una metáfora económica, el exceso de la oferta produjo una concentración de la demanda. Rápidamente emergió muy por encima de la multitud de candidatos un grupo de cinco partidos y frentes o alianzas. En primer lugar se situaron los tres líderes en condiciones de ambicionar enfrentarse en la segunda vuelta: Lourdes Flores (UN), Ollanta Humala (Partido Nacionalista-UPP) y Alan García (APRA). Luego, a mucha distancia, aunque seguros de superar la valla y de disponer de una bancada parlamentaria, Valentín Paniagua, el destacado presidente de la transición de 2000, y la representante de Alberto Fujimori, encarcelado en Chile.

Los primeros resultados del 9 de abril (sondeo a boca de urna, conteo rápido) no permitieron determinar si Lourdes Flores o Alan García, en situación de virtual empate técnico, habrían de acompañar a Humala en la segunda vuelta. Fue necesario esperar hasta mayo para obtener los resultados definitivos.

Unión Por el Perú-UPP	Ollanta Humala	30,6% de los votos válidos
Partido Aprista Peruano-APRA	Alan García	24,3% de los votos válidos
Unidad Nacional-UN	Lourdes Flores	23,8% de los votos válidos



© Archivo OSAL

Estos resultados pueden ser interpretados como el signo de una cierta continuidad. Desde comienzos de la década del ochenta (salvo en el caso de las reelecciones fujimoristas), el Perú ha votado sistemáticamente por el cambio, lo cual no consolida lealtades políticas pero tiene algo de racional: en la medida en que los gobiernos defraudan a sus electores, resulta lógico votar en la elección siguiente por quien encarne mejor la alternativa opuesta a la del mandatario saliente. Esta vez, más de dos terceras partes de los electores apostaron al cambio, más radical en el caso de Humala, más moderado en el caso de García.

Asimismo, en un país tan fragmentado social, geográfica y étnicamente, con una débil penetración de la sociedad por parte de los partidos y un comportamiento de los privilegiados que desmiente a cada instante su invocación de los principios democráticos, no resulta sorprendente que sea percibido como más atractivo un candidato ajeno al *establishment* social, político y económico del país. Fujimori derrotó a Vargas Llosa en 1990, y Toledo triunfó sobre Alan García y Lourdes Flores en el 2001, en buena parte porque los sectores populares se sintieron mejor identificados y representados por Fujimori y por Toledo que por sus más formales y elocuentes contrincantes. La irrupción electoral de Ollanta frente a García y Flores en 2006 se inscribe en esta nueva pero persistente tradición.

Sin embargo, las similitudes no deben ocultar las diferencias y lo específico del momento actual. En 1990 se trataba de salir del caos en que el gobierno de Alan García dejaba el país al término de su mandato: guerra sucia con Sendero Luminoso por un lado, hipe-

rinflación por el otro, y una inseguridad política y económica que se habían vuelto insostenibles. El conjunto de los partidos –izquierda, APRA, derecha– fue desplazado por Fujimori. En 2001 el retorno a la democracia se encontraba dentro de las prioridades de buena parte de la población. Frente a esto, por haber liderado las movilizaciones antifujimoristas, Toledo se había posicionado mejor que sus contendores.

Ahora está a la orden del día, y severamente cuestionado por el voto de la mayoría, el divorcio entre la economía y la política. La economía va bien: crecimiento del PBI, incremento y diversificación de las exportaciones, déficit fiscal e inflación reducidos. La política va mal: no sólo mantenimiento o reducción poco significativa de la pobreza que afecta a la mitad de la población, sino también multiplicación en los últimos cinco años de protestas, movilizaciones y conflictos mineros, cocaleros o locales –desde la sierra de Piura hasta el altiplano aymara, con un reclamo común de los pobladores rurales: “queremos un Estado que funcione y un gobierno que esté cerca”. Por lo general, en la mayoría de estos conflictos el Estado no funciona, y el gobierno menos aún. Paralelamente, decrece el apoyo a los partidos y a la democracia como régimen. El propio Alejandro Toledo expresó en forma caricatural este divorcio entre la economía y la política, al asombrarse de que “Wall Street lo aprobaba mientras que la opinión pública lo desaprobaba”.

En este contexto, en el que se privilegió y priorizó drásticamente la integración externa en relación a la interna, el discurso nacionalista puede ser interpretado en un doble registro: para los sectores dominantes, empresas mineras, grandes exportadores y servicios de telecomunicación, entre otros, despierta de inmediato los aterradores fantasmas del proteccionismo y de las nacionalizaciones. En el caso de amplios sectores populares, en particular rurales, y más allá de lo que se percibe como la defensa de sus intereses, este discurso puede ser recibido como otorgándoles elementos de pertenencia a la historia en curso y también como valoración de su cultura.

Por otra parte, el mapeo electoral de los resultados de abril 2006 muestra con más nitidez que en otras oportunidades algunas de las grandes brechas territoriales, sociales y étnicas que atraviesan al país. El único departamento donde Lourdes Flores (UN) llega en primer lugar es Lima, que por cierto representa alrededor del tercio del electorado. El APRA logra alzarse con la mayoría relativa en sólo cinco departamentos del litoral, cuatro de ellos en la costa norte, su feudo tradicional desde su fundación por Haya de la Torre en la década del treinta. En comparación, la presencia humalista aparece como arrasadora en 18 de los 24 departamentos, y en 146 de las 194 provincias.

En la práctica, a través de la lente electoral, estamos en presencia de tres países: Lima, la “Ciudad de los Reyes”, que concentra las principales actividades económicas y fuera de la cual no logran implantarse de manera sólida las organizaciones políticas de la derecha;

la costa norte, donde predominan la agricultura comercial (caña de azúcar, algodón, arroz, frutales) y una vocación exportadora, fortaleza aprista; y por último el sur, la sierra, corazón del mundo andino, y la selva, donde esta vez irrumpió con fuerza Humala. Naturalmente, esta situación, tomando en cuenta la concentración de los electores en Lima y las principales ciudades, no garantiza en nada, como veremos, la victoria de Humala en la segunda vuelta, donde no habrá más que dos contendores.

La frustración de la derecha

La derecha representada por la alianza Unidad Nacional tenía una candidata considerada por todos los analistas como particularmente honesta y experimentada, involucrada en la política desde hace más de veinte años. Dos veces congresista (1993-2001) y presidenta del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores se postulaba a la presidencia de la república por tercera vez. Después de un primer fracaso en 1995, se había quedado en las puertas de la segunda vuelta en 2001. Cinco años más tarde creía con firmeza en sus posibilidades de convencer a los peruanos que rechazan en masa a la clase política, y esperaba abiertamente beneficiarse de la dinámica provocada por la elección de Michelle Bachelet a la presidencia de Chile el pasado 15 de enero. Gozaba además del apoyo de la mayor parte de los medios de comunicación.

Había iniciado mucho antes que sus contendores una campaña de proximidad, viajando por todo el país, cambiando su estrategia para aproximarse a los sectores populares –e incluso en su manera de vestir– presentando un programa más centrista, y multiplicando las promesas sociales: garantizar un sistema de seguro social a los que no disponen de los medios necesarios, crear 650 mil puestos de trabajo, asignar más del 6% del PNB a la educación, etcétera. Sin embargo, para “abrir el mercado manteniendo un Estado fuerte” apoyaba el TLC con EE.UU., que Alejandro Toledo al mismo tiempo pretende firmar “sí o sí”.

A pesar de sus méritos, de sus ilusiones o de sus máscaras, y a diferencia del social-demócrata Alan García y del nacionalista Ollanta Humala, era percibida como la encarnación de la continuidad de la política económica que existe desde 1990 con sus buenos y malos aspectos, islotes de prosperidad en un mar de desigualdades. El hecho de que la UN aceptara como candidato a la vicepresidencia a Arturo Woodman, hombre de confianza del Grupo Romero, el principal grupo económico del país, reforzó la crítica que se le hacía en términos de representar los intereses de las empresas y de los sectores más ricos.

Con todo, durante meses, y hasta el 19 de marzo de este año, cuando fue desplazada por Ollanta Humala, los sondeos de opinión ubicaron a Lourdes Flores a la cabeza de las

“Al mismo tiempo que denunciaba a los ‘políticos tradicionales’ por ser responsables de la exclusión y de la miseria, presentó propuestas políticas importantes: revisión de los contratos con las transnacionales; rechazo a la privatización de los puertos y servicios públicos; nuevo estudio del TLC y posibilidad de no suscribirlo”

intenciones de voto. Pocos días antes de las elecciones todavía parecía muy probable que Lourdes Flores fuera elegida en la segunda vuelta. Su fracaso es por lo tanto una inmensa frustración para la derecha, que desde hace veinticinco años no logra imponer a su candidato.

La cruzada anti-Humala

El perfil del comandante en situación de retiro Ollanta Humala es casi diametralmente opuesto al de Lourdes Flores. Muy pocas cosas se sabían de él al inicio de la campaña. Ollanta y su hermano Antauro saltaron a la primera plana por primera vez en octubre de 2000 gracias a la asonada que protagonizaron en Locumba, en las postrimerías del fujimontesinismo. Amnistiado por el congreso y enviado como agregado militar a Francia primero y después a Corea del Sur, Ollanta se había mostrado muy discreto, y permaneció olvidado hasta el año pasado. Este novato en política demostró ser un hombre que aprende rápidamente, asociándose con un selecto núcleo de profesionales eminentes, y con notables capacidades para moverse como un pez en el agua cuando se acercaba al pueblo.

Al mismo tiempo que denunciaba a los “políticos tradicionales” por ser responsables de la exclusión y de la miseria, presentó propuestas políticas importantes: revisión de los contratos con las transnacionales; rechazo a la privatización de los puertos y servicios públicos; nuevo estudio del TLC y posibilidad de no suscribirlo; regalías mineras; integración latinoamericana; Asamblea Constituyente. Pocos partidarios del candidato parecen tener una idea precisa de en qué consiste el programa presentado por la UPP, pero todos están convencidos de que “Ollanta” –como se le denomina ahora– está del lado de los pobres, permitirá una mejor redistribución de la riqueza, y será el arquitecto del cambio.

El candidato tuvo que sortear varios tropiezos. En primer lugar, las incontinencias verbales de su familia: su padre Isaac, fundador del pensamiento “etnonacionalista”; su

hermano Antauro, actualmente preso por haber liderado en enero de 2005 el asalto y la toma de una comisaría, con un saldo de cinco policías muertos; y su madre Elena Tasso, que recientemente afirmó: “Fusilamos a dos homosexuales y no habrá más inmoralidad en la calle”. El clan familiar asusta y confunde. En segundo lugar, Ollanta ha sido objeto de acusaciones vinculadas con torturas y asesinatos de civiles en 1992, durante el combate contra el terrorismo, cuando dirigía la base militar de Madre Mía cerca de Ayacucho. Todo esto, y un conjunto de especulaciones y difamaciones –fundadas o no– fueron municiones para la agresiva campaña –promovida por parte de la derecha y de los medios– de calumnias y de demonización de su candidatura, desencadenada por su alineamiento con Hugo Chávez y Evo Morales. Basta citar como botón de muestra el editorial del *Correo* (uno de los diarios de mayor circulación) del 11 de abril: “Esto es lo que ha ocurrido con el fascista Humala. Solamente un 30% ha optado por esta primitiva propuesta militarista con tufillo montenisino-velazquista-chavista, manejada por millonarios oportunistas”.

Esta cruzada mediática de “todos contra Humala”, no exenta de inflexiones racistas en torno a sus “resentidos” electores, es la tela de fondo sobre la cual un conjunto de personalidades, desde Mario Vargas Llosa hasta el propio presidente en ejercicio, plantean que para la segunda vuelta la disyuntiva es entre democracia o autoritarismo. Una fórmula que al abogar a favor de una coalición de centro-derecha (Alan/Lourdes) subvalora o niega la demanda mayoritaria de cambio, y lleva consigo el riesgo de desvalorizar la democracia al identificarla con el *statu quo*, y de seguir ignorando las fracturas sociales, étnicas y regionales a las que hemos aludido.

Alan, el equilibrista

Como es sabido, la sorpresiva revitalización electoral del APRA en 2001 había obedecido en gran medida al carisma de Alan García. Esta vez también demostró tener olfato y reflejos políticos al ubicarse en una posición equidistante de sus contendientes, estigmatizando a Lourdes Flores como la “candidata de los ricos” y criticando la falta de experiencia de Ollanta, calificándolo como “apuesta al vacío”. Para enfrentar la segunda vuelta, se posiciona hábilmente como el candidato del “cambio responsable” y no amenazante.

García ha propuesto cambios que no cabrían dentro del actual esquema toledista. Son iniciativas menos drásticas que las de Humala, pero relativamente parecidas en determinados aspectos. La revisión de los contratos mineros, los programas sociales, el crédito agrario, el cuestionamiento del Tratado de Libre Comercio, el cambio de la Constitución sólo se diferencian en grado, pero no en principio. Exigirían cambios reales en la forma y el fondo del Estado peruano. El punto clave para García remite a si podrá cumplir con sus

ofrecimientos en plazos aceptables para el clima social, manteniéndose –como afirmó que lo hará– dentro de los márgenes de la actual política macroeconómica.

Por el momento, su cruz es el recuerdo que los peruanos tienen del apocalipsis en que terminó su gobierno en 1990, que conllevó una enorme frustración con la democracia y creó el clima para el autoritarismo fujimorista: hiperinflación (la inflación acumulada entre 1985 y 1990 fue del 2,2 millones %), escasez, apagones, copamiento partidario, corrupción generalizada, violencia política descontrolada, crímenes de Estado, etcétera.

Más que las propuestas que hagan los dos candidatos, pesarán en la campaña de la segunda vuelta los temores que despierten uno y otro: Humala recordando los desastres ocurridos durante el régimen aprista, y García pretendiendo demostrar que un gobierno de su rival podría parecerse al suyo de la década de los ochenta.

Perspectivas

El acercamiento ostensible a Alan García por parte de una serie de empresarios, políticos y periodistas que hasta hace poco despotricaban de su persona y rodeaban a Lourdes Flores es la señal inequívoca de que buena parte de este sector se ha resignado a elegir lo que denomina el “mal menor”.

Al mismo tiempo, los desenfadados intentos de Chávez y de Morales de inmiscuirse en la elección peruana, llegando incluso a insultar al presidente Alejandro Toledo, contribuyen a atizar las resistencias suscitadas por las ambigüedades de Humala o despertadas por la demonización mediática que padece. Ello afecta su capacidad de convencer a los indecisos y a los que votaron por otros candidatos.

En estas condiciones, a escasas semanas de realizarse la segunda vuelta, y aunque en las elecciones peruanas la sorpresa siempre está a la vuelta de la esquina, todo parecería indicar que Ollanta Humala resultará derrotado el 4 de junio.

Esto no debe ocultar que su irrupción en la escena electoral, al incitar a Lourdes Flores a reorientar su discurso más hacia el centro, y a Alan García a “izquierdizar” el suyo, ha contribuido significativamente a la formación de un nuevo consenso social en torno al tipo de crecimiento excluyente generado por la política neoliberal, a la necesidad de renegociar los contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas mineras y de hidrocarburos que están obteniendo ganancias extraordinarias, al imperativo de aumentar el gasto en educación, salud y lucha contra la pobreza para que dichos servicios públicos sean de calidad y de alcance universal, entre otros temas.



© Archivo OSAL

El posible fracaso electoral de Humala en junio no implica la muerte súbita del humalismo. Dados los resultados obtenidos a lo largo del país, el movimiento está bien ubicado para obtener algunas cabezas de puente en las elecciones municipales y regionales de noviembre. Como señala Romeo Grompone, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), "todo indica que en los años venideros vamos a seguir viviendo conflictos de difícil resolución en el ámbito local, en la minería, con los cocaleros. Si las situaciones de por sí graves no llegaron a extremos que hicieran insostenible la gobernabilidad en el período que está terminando, se debió en buena medida a la falta de liderazgos con una extendida capacidad de convocatoria. Una probable hipótesis es que Humala lo pueda lograr y cerque al sistema político tanto en el congreso como fuera de él".